

Esta Asamblea es expresión de la solidaridad que suscita en los pueblos libres la defensa de los valores que la civilización ha ido convirtiendo en patrimonio común de la Hermandad.

A esta altura de los tiempos, próximos ya a finalizar el siglo XX, las lecciones dolorosas de la historia - guerras, tiranías, genocidios, revoluciones - nos han enseñado que el respeto de la dignidad de las personas y la vigencia plena de sus derechos esenciales no es cosa que atañe a cada país como algo propio, de su exclusiva incumbencia; es base fundamental para construir y asegurar la convivencia pacífica entre los hombres y entre las naciones.

La afirmación de la verdad, la defensa de la libertad de las personas y del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos la confianza en la razón y el rechazo de la fuerza para solucionar los desacuerdos, la aspiración a la justicia, la coincidencia en que, en último término, todos somos hermanos y nuestro destino es solidario, son conceptos que trascienden las fronteras, los idiomas y las razas y que aunan la acción de todos los demócratas de la tierra en nuestra lucha por construir un mundo mejor.

La adhesión y respeto a esos valores no es solo un gesto de buena voluntad; es un deber moral y jurídico a cuyo cumplimiento están obligados los gobiernos de todos los estados - Chile entre ellos - que contrajimos el solemne compromiso de acatarlos al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos que la complementan.

No estáis aquí, por tanto, señores parlamentarios de países amigos, en un acto de intromisión en los asuntos internos de nuestra patria al participar de esta Segunda Asamblea Parlamentaria Internacional por la Democracia en Chile, estáis simplemente respaldando la legítima demanda de nuestro pueblo de que Chile haga honor a ese compromiso, restaurando la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho del pueblo chileno a decidir libremente su destino.

En esta etapa de nuestra lucha por reconquistar la libertad, todos los sectores democráticos estamos coincidiendo en que el mejor instrumento para lograr esa meta por una vía pacífica, razonable y eficaz, es la realización de elecciones libres.

Este planteamiento común importa tres tareas específicas:

1º Motivar a los chilenos, a mucho de los cuales catorce años de dictadura han sumido en la apatía, la desesperanza o la pérdida de fé en la eficacia de los medios racionales, para que reaviven su adormecida conciencia cívica y se resuelvan a ejercer sus derechos ciudadanos, inscribiéndose en los registros electorales para contribuir cada uno con su voto a decidir el destino del país;

2° Movilizar a todos los demócratas en demanda de las garantías indispensables para que un proceso electoral sea libre, informado y libre, de tal manera que pueda reflejar realmente la verdadera voluntad del pueblo. Sin libertades públicas amplio y oportuno acceso a todos los medios de comunicación especialmente a la T.V., y mecanismos de control de la corrección del procedimiento electoral, ninguna elección ni plebiscito puede ser aceptado como expresión libre de la voluntad popular, ni como medio adecuado para restablecer la democracia; y 3° Exigir que en vez del plebiscito programado por el régimen, se verifiquen elecciones libres y abiertas de Presidente de la República y de Congreso Nacional, íntegramente elegido por el pueblo y dotado de los poderes constituyentes indispensables para cambiar la institucionalidad dictatorial por otra auténticamente democrática.

La demanda de elecciones libres nos exige, a los partidos democráticos, ser capaces de ponernos de acuerdo en torno a una propuesta política programática común que presentar al país como alternativa de Gobierno frente al empeño de Pinochet y de sus seguidores por perpetuarse en el poder. Es ésta una gran responsabilidad, que nos exige a todos sacrificar algo de nuestras particulares concepciones ideológicas y legítimas diferencias, renunciar a cualquier clase de pretensiones hegemónicas y proceder con criterio realista, patriotismo y generosidad.

En los esfuerzos de concertación que estamos realizando, el P.D.C. en cuyo nombre hablo, está procediendo con esa disposición y está seguro de que todos los demás partidos democráticos que están participando en la tarea lo hacen con el mismo ánimo.

Estamos en una carrera contra el tiempo. Día que pasa sin que el país visualice una clara alternativa de Gobierno frente al actual régimen, corre a favor de Pinochet. Si logramos, como espero, de aquí a un par de meses, presentar al país una propuesta programática común, que junto con establecer las bases esenciales de la futura institucionalidad democrática, de respuesta, con profundo sentido de justicia e indispensable realismo, a los principales problemas económico sociales que afligen al país y a la gran mayoría de los chilenos, daremos el mejor mentis a la jactancia con que Pinochet se erige en única respuesta frente al riesgo de un posible caos y pondremos definitiva lápida a su desmesurada ambición de prolongar la dictadura.

Las bases ya alcanzadas en los acuerdos del grupo de los 24, en la Alianza Democrática, en el Acuerdo Nacional y en el Pacto sobre Bases de sustentación de la Futura Democracia, y las importantes coincidencias que revelan los estudios de los equipos técnicos de varios de nuestros partidos, nos hacen esperar con optimismo que seremos capaces de cumplir esta tarea oportuna y felizmente, como el pueblo de Chile tiene derecho a exigirnos. Y que también seremos capaces, si ponemos en ello nuestra mejor voluntad, en encarnar la propuesta democrática en un candidato o abanderado que por su honestidad y condiciones, concite la adhesión de la gran mayoría del pueblo.

Con estos claros planteamientos, con el apoyo de cinco a seis millones de chilenos inscritos en los registros electorales y con un pueblo movilizado exigiendo elecciones libres y reclamando la solución de sus múltiples problemas - como lo están haciendo en estos días académicos y estudiantes universitarios - ¿con qué autoridad podrían los detectores del poder seguir negándose a discutir y convenir los cambios indispensables, al programa por ellos trazado, para hacer posible una solución pacífica al drama que Chile está viviendo?

Resistirse a hacerlo sería de su parte un grosero abuso de su fuerza. Y la historia prueba que quienes, confiados en la fuerza, desestiman la razón, terminan por ser víctimas del proceso de violencia que con su ceguera y arbitrariedad desencadenan.

Los demócratas cristianos rechazamos toda forma de violencia, venga de donde venga. Condenamos categóricamente al terrorismo, sea subversivo o estatal. Ninguna invocación a la seguridad nacional ni al derecho de defensa lo justifica. Por eso denunciarnos como un crimen inhumano el secuestro en estos días del Coronel de Ejército Sr. Carlos Carreño y en nombre de la razón y de la justicia reclamamos a sus secuestradores, sean quienes sean, su inmediata liberación. Por eso reclamamos del Gobierno que ponga fin al exilio, la liberación de los periodistas de APSI, injustamente detenidos y el término de los arbitrarios procesos contra los directores de varios periódicos y contra el dirigente socialista Clodomiro Almeyda. Por eso reclamamos de la Justicia el total y pronto esclarecimiento de tantos crímenes que en los últimos años han conmovido al país. Por eso rechazamos como arbitrario y antidemocrático el Art. 8 de la Constitución de 1980 que establece la discriminación ideológica.

En su reciente visita a Chile S.S. Juan Pablo II nos hizo fervientes llamados a la reconciliación. Los hechos demuestran que sus palabras hallaron oídos sordos en el régimen y en algunos sectores de la oposición.

Por nuestra parte, convencidos de que, en último término, la fuerza de la razón puede más que la razón de la fuerza, seguiremos luchando por todos los medios pacíficos a nuestro alcance hasta lograr que Chile se reencuentre con su histórica tradición democrática de la que tanto nos enorgullecíamos en los tiempos de la República.

Dentro de este predicamento y a pesar de los múltiples reparos que merece la ley de partidos políticos - como en general la institucionalidad del régimen - hemos decidido iniciar el proceso de inscripción de nuestro Partido. Lo haremos para disponer de los medios que permitan controlar la corrección del acto electoral y como un gesto demostrativo de nuestra voluntad de buscar caminos de diálogo y entendimiento. Pero que nadie se engañe. Este paso no significa incorporarnos al sistema, ni aceptar de ningún modo el camino plebiscitario trazado por el régimen. No consumaremos ese proceso de inscripción si no se dan garantías claras de que el pueblo chileno podrá decidir sobre su futuro en un acto electoral libre, limpio e informado. Y a los partidos amigos a quienes preocupa esta decisión les decimos claramente que ella no excluye nuestra disposición a considerar

0

otras formas de acción que puedan ser más eficaces para una actuación conjunta con ese mismo fin de quienes concertemos una propuesta programática común. Señores parlamentarios que nos hacéis el honor de acompañarnos; os habrá sorprendido, sin duda, en estos días, la manifiesta contradicción que habéis observado en los hechos de nuestro diario vivir. Nos hemos reunido libremente; pero eso no ha sido obstáculo para que un ex-diputado sea detenido desde este mismo hotel y luego dejado en libertad ¿Por cuánto tiempo? Habéis visto las cámaras de T.V. filmando nuestras reuniones y a los periodistas tomando notas; pero los programas televisivos no han transmitido esas imágenes, ni la mayoría de los diarios ha informado de lo que aquí se ha dicho. [El gobernante omnipotente, que acaba de renovar el estado de emergencia que le permite disponer a su arbitrio de la libertad de las personas, afirma su "profunda vocación democrática de justicia y libertad"]

En muchas partes habéis observado o escuchado imágenes o voces que con lirismo nos hablan de Chile como la "tierra prometida", en la que imperan la libertad, el bienestar, la justicia y la seguridad, cosa que os han aseverado los altos personeros del régimen a que algunos de vosotros habéis visitado. Pero, por poco que hayáis observado, habréis advertido que ese cuadro idílico de fantasía contrasta con una cruel realidad; la libertad que el régimen cultiva es la de hacer negocios, pero ello no le impide reprimir las de opinión e información, de reunión y de asociación, ni detener arbitraria y caprichosamente a quien se le ocurra, ni allanar masivamente poblaciones populares. Gozan de bienestar una minoría que en los últimos años se ha enriquecido desmesuradamente mientras la desocupación agobia a uno de cada seis chilenos y un tercio de la población nacional sobrevive apenas con menos de lo indispensable para la canasta familiar. En las relaciones laborales los patrones imponen la ley del más fuerte. El miedo a perder el empleo, o a ^{ser} víctimas de abusos de poder, o a que sus bienes sean sustraidos por el banco acreedor, pende como espada de Damocles sobre cientos de miles de chilenos.

Si fuera cierta toda la bonanza que el gobierno asevera ¿por qué se niega a someter el destino del país al veredicto soberano de su pueblo, en elecciones libres, limpias e informadas?

Es lo que los chilenos tenemos derecho a exigir como el único camino que puede abrir a nuestra patria un futuro de reconciliación, de estabilidad institucional y de paz perdurable.

Sed vosotros, señores parlamentarios que representáis a las democratas de tantos países amigos, testigos de que es esto lo que los democratas chilenos demandamos y de nuestra patriótica voluntad de no cejar en este empeño.